



# DIARIO DE SESIONES DEL **PARLAMENTO DE NAVARRA**

---

VII Legislatura

Pamplona, 25 de febrero de 2009

NÚM. 17

---

## **COMISIÓN DE RÉGIMEN FORAL**

PRESIDENCIA DEL ILMO. SR. D. ROMÁN FELONES MORRÁS

**SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2009**

### **ORDEN DEL DÍA**

- Comparecencia del Defensor del Pueblo para presentar el “Informe relativo a la Ampliación de Competencias del Defensor del Pueblo de Navarra en materia de [Protección de Menores](#)”.
-

## SUMARIO

Comienza la sesión a las 11 horas y 9 minutos.

**Comparecencia del Defensor del Pueblo para presentar el “Informe relativo a la Ampliación de Competencias del Defensor del Pueblo de Navarra en materia de Protección de Menores”.**

Para presentar el informe toma la palabra el Defensor del Pueblo de Navarra, señor Enériz Olaechea (Pág. 2).

En el turno de intervenciones de los portavoces parlamentarios toman la palabra el señor Marcotegui Ros (G.P. Unión del Pueblo Navarro), la señora Pérez Irazabal (G.P. Nafarroa Bai) y los señores Monzón Romé (G.P. Socialistas del Parlamento de Navarra) y Erro Armendáriz (A.P.F. Izquierda Unida de Navarra-Nafarroako Ezker Batua), a quienes responde, conjuntamente, el Defensor del Pueblo de Navarra (Pág. 8).

Se levanta la sesión a las 12 horas y 43 minutos.

(COMIENZA LA SESIÓN A LAS 11 HORAS Y 9 MINUTOS.)

**Comparecencia del Defensor del Pueblo para presentar el “Informe relativo a la Ampliación de Competencias del Defensor del Pueblo de Navarra en materia de Protección de Menores”.**

SR. PRESIDENTE (Sr. Felones Morrás): *Muy buenos días, señoras y señores Parlamentarios. Damos comienzo a esta Comisión de Régimen Foral dando la bienvenida, en primer lugar, al Defensor del Pueblo, señor Enériz, y a sus acompañantes, señores Beltrán y Sarasibar, por otra parte ya asiduos en esta Comisión. Comenzamos con el primer y único punto del orden del día: Comparecencia del Defensor del Pueblo para presentar el informe relativo a la ampliación de competencias del Defensor del Pueblo de Navarra en materia de protección de menores. Para la exposición tiene la palabra el señor Enériz.*

SR. DEFENSOR DEL PUEBLO DE NAVARRA (Sr. Enériz Olaechea): *Muchas gracias, señor Presidente. Buenos días, señorías, egun on denoi. Muchas gracias por su presencia, sobre todo por atender con tanta prontitud la solicitud de comparecencia para exponerles este informe, un informe que tiene por origen, precisamente, una petición del Parlamento, con motivo del debate sobre el Estado de la Comunidad Foral en el Pleno de 7 de noviembre de 2008, en la que se acordaba solicitar al Defensor del Pueblo la elaboración y posterior remisión de un informe planteando modificaciones legales, legislativas o reglamentarias, las que entendiera necesarias, para un desarrollo y ampliación plena de sus competencias con el objeto de mejorar el control de las políticas que desde las Administraciones Públicas de la Comunidad*

*Foral se implementen en materia de protección de los menores. Eso era lo que decía la resolución y de esa resolución trae causa el presente informe que pretende dar cumplimiento al citado mandato del Pleno.*

*Como señala el informe, del que les extraigo un resumen, el ordenamiento no recoge todas las competencias y facultades que el Defensor del Pueblo puede ejercer en materia de protección de menores, no lo hace porque la ley reguladora de la institución, con carácter general, da una visión de la institución y el Defensor del Pueblo es Defensor del Pueblo de todos los sectores, de sectores de menores, de sectores de mayores, de sectores de usuarios de la sanidad, de sectores de usuarios de la administración electrónica, de todos los sectores, es Defensor de todo el conjunto de la población. Si que hay una mención en la Ley Foral 15/2005, de 5 de diciembre, que tiene un nombre de promoción, atención y protección a la infancia y a la adolescencia –si me permiten me referiré a ella como la ley foral del menor para evitar tan largo nombre–, y que contempla en su artículo 14 al Defensor del Pueblo como el defensor del menor, prácticamente, no lo menciona así, no es el defensor del menor, pero, prácticamente, lo considera como el defensor del menor y tampoco le atribuye ninguna función que no estuviera en la ley reguladora con carácter general.*

*El informe trata de atender la voluntad expresada por el Parlamento, como se ha dicho, para que las competencias del Defensor sean desarrolladas y ampliadas de forma plena. El informe se acompaña al final de un anexo con forma de texto legal. Le hemos dado muchas vueltas a si esto era procedente hacerlo o no, lo hemos hecho como una primera experiencia con la finalidad no en ningún momento de dar alguna instrucción ni*

*dirección ni indicación al Parlamento, que es quien tiene la plena iniciativa legislativa, el Parlamento y el Gobierno en el caso de las instituciones parlamentarias. Hablaba ahora mismo con un Parlamentario que en el caso de las instituciones parlamentarias la práctica parlamentaria es que la iniciativa la tenga el propio Parlamento, pero, bueno, eso es más práctica y costumbre constitucional, como se suele decir, que materia jurídica legislativa. En este caso lo que hemos hecho es aportar un borrador para que se expresara lo que queríamos decir, un borrador que tiene puntos discutibles, por eso decía que nos llevó mucho tiempo decidir si lo presentábamos o no, y queremos ver un poco la experiencia de ver cómo sale, por decirlo de alguna forma, es la primera vez que lo hacemos y si vemos que originamos un problema pues sería la última.*

*Entro al contenido sustancial del informe y a comentar las conclusiones que pueden ser más llamativas.*

*La primera es una consideración de rango formal. Decía la resolución aprobada que se plantearan las modificaciones legislativas o reglamentarias. Nos parecía que lo más lógico es que fuera, dada la materia y el ámbito sobre el que recaen, el de los derechos del menor, por un principio de reserva de ley, una ley la que establezca esta cuestión. A partir de ahí, a partir de que es una ley se estudiaron tres posibles alternativas de ley: modificar la ley general introduciendo un nuevo precepto; modificar la ley del menor estableciendo con más detalle las funciones del Defensor del Pueblo en materia de derechos de los menores; o proponer una ley foral que de modo específico regulase la ampliación de funciones según fueran muchas o pocas, si eran pocas bastaban las otras dos y si eran muchas haría falta en ese sentido que fuera una ley específica que le atribuyera expresamente la condición de defensor del menor, porque en esto luego ya contaré que hay alguna pequeña discusión a nivel nacional, sin modificación en este último caso de las otras normas legales preexistentes.*

*De las tres alternativas en términos de técnica jurídica nos pareció la más aconsejable la última y es la que se acompaña en el anexo. No parecía oportuno alterar la norma general, la Ley foral del año 2000, por lo que he dicho, porque es un tema sectorial y en esa Ley 4/2000 no hay temas sectoriales. Tampoco nos pareció oportuno insertar la nueva regulación en el artículo 14 de la Ley Foral del menor, porque ahí prácticamente lo único que se indica es que el defensor del menor va a ser el Defensor del Pueblo, pero nada más, no se le atribuyen funciones nuevas. Así que lo que creímos más acertado fue irnos hacia una norma específica. Esta nueva ley partiría de otorgar expresamente a la institución del Defensor del Pueblo la condición de*

*Defensor del Menor de Navarra, que ya la tiene Andalucía. En Andalucía actúa, según la materia, como Defensor del Menor o como Defensor del Pueblo. Cuando actúa en materia específica y concreta en materia de menor se llama Defensor del Menor y cuando actúa en términos generales se llama Defensor del Pueblo, pero es la misma institución y es la misma persona, el mismo titular.*

*Por otro lado, una de las novedades de la ley que derivaría de esto es que el ámbito de la ley no sería ya solo supervisar la actividad de las Administraciones Públicas —esta es una de las novedades que tiene la ley cuya naturaleza cambia—, ya no se trataría de supervisar, que es lo que dice la ley general, supervisar es que mira por encima, la nuestra no es una función de control estricto ni de dirección de la labor administrativa, nosotros lo que decimos es, en una visión general, aquello que nos parece que puede estar bien o mal y no decimos nada más, entramos en algunos aspectos, pero luego la opinión es libre, lógicamente. Yo creo que ayer ya se vio que el Gobierno tenía una posición respecto a un tema que se trató sobre las famosas casillas del 0,7, etcétera, y esta institución tiene otra, o sea, nosotros supervisamos cuál es la función, damos nuestra opinión y el Gobierno tiene entera libertad, como no puede ser de otra manera, para promover las iniciativas si lo considera oportuno o para dejar las cosas como están. Pero en este caso lo que plantea la ley es, precisamente, no solo esa función de supervisar, sino extender su ámbito de actividad a servicios privados que tengan a su atención a menores y esto hace que ya la función no sea tanto de supervisar como de inspeccionar, estamos cambiando un poquito la naturaleza de la institución, ya no es un supervisor de la Administración sino que también es un supervisor, un inspector, a efectos prácticos, de las actividades privadas, es decir, si en una guardería se produce una vulneración grave de derechos, el Defensor del Menor tendría la posibilidad de entrar, de requerir la instancia de la Administración, de requerir la intervención del Ministerio Fiscal e incluso de la Policía Foral si viera que ahí hay una vulneración, como digo, grave de un derecho.*

*Esto ya lo tiene el Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, no es nada nuevo, y también aparece en una proposición de ley orgánica del Defensor del Menor que se presentó en la Cortes por el Grupo Parlamentario de Unión, Progreso y Democracia y que actualmente se está debatiendo en las Cortes Generales. Es decir, no hemos cambiado nada de lo que establece la Ley del Defensor del Menor en la Comunidad de Madrid y de lo que establecería esa proposición de ley orgánica si llega a aprobarse, que parece que tiene algunas posibilidades de que no se apruebe, pero estamos en la misma onda, por decirlo de alguna*

*forma. La proposición de ley orgánica del Defensor del Menor es una mezcla entre la Ley del Defensor del Pueblo a nivel nacional y la del Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, digo que una de las grandes novedades de esta proposición de ley que acompañamos es que extiende su función garantista a las entidades privadas, primer gran aspecto, y, como decimos, supone una novedad fundamental de la normativa actual. El Defensor del Menor pasa así a ser una institución pública, creada por el Parlamento de Navarra, en eso no hay ningún problema, con facultades de policía, de inspección y de control sobre la iniciativa privada y que excede la función general actual de supervisión de la actividad parlamentaria que hoy tiene.*

*Las siguientes funciones que se citan son funciones que, con más o menos matices, ya puede realizar el Defensor del Menor sobre las Administraciones y sobre los servicios que están sometidos a tutela administrativa, porque ya están en la ley general o en la ley del menor. Son las que se citan ahí.*

*Proceder a realizar investigaciones, bien de oficio o a instancia de parte, mediante la presentación de una queja. Eso ya lo puede hacer.*

*También puede proponer medidas encaminadas a mejorar y modernizar los servicios públicos y privados —una parte de la novedad— dedicados a la infancia y a la adolescencia. Puede decir, por ejemplo, aspectos que podrían mejorar las guarderías. En este sentido alguna actuación también hemos hecho. Nos hemos dirigido al Departamento de Bienestar Social y le hemos dicho: saquen las guarderías un poco de ese limbo en el que actualmente están, porque aquellas guarderías que no son centros educativos infantiles de 0 a 3, ¿qué son y qué normativa tienen? En el caso de Pamplona hay una normativa, pero en el caso de otras localidades de Navarra no la hay y lo que hemos dicho y hemos propuesto al Gobierno es que establezca un decreto de garantías mínimas de esas guarderías, que no son centros educativos infantiles de 0 a 3, que es a donde llevan los padres a los niños y no tienen una finalidad educativa, sino que es una finalidad depositaria mientras ellos se van a trabajar o a realizar otras actividades.*

*Otra función que también tiene actualmente es denunciar ante el Ministerio Fiscal hechos en los que un menor haya podido ser víctima de un delito o de una falta. Esto ya se hace en cuanto se aprecia cualquier situación.*

*Poner en conocimiento, con carácter urgente e inmediato, ante el Departamento de Asuntos Sociales, que es el órgano competente, los hechos en los que considere que una persona menor de edad ha podido o pueda ser víctima de una infracción administrativa. Lo normal es que sea ante el*

*Departamento de Bienestar Social, pero también puede ser ante el Departamento de Educación en un caso de acoso escolar.*

*Fomentar el conocimiento y la divulgación de los derechos de los menores y realizar campañas de divulgación y sensibilización. También se puede hacer actualmente.*

*Ejercer funciones de mediación o arbitraje entre las partes siempre que las partes lo acepten. Esto también se puede hacer, porque una de las funciones del Defensor del Pueblo es la de mediador. En Francia se le llama Médiateur, pero va a cambiar el nombre, Defensor de los Derechos de los ciudadanos, pero era el mediador porque tiene una función de mediación que está recogida en las leyes.*

*También puede requerir, como hemos dicho, a los órganos competentes de las Administraciones su actuación. En concreto, vela para que se cumplan los programas y actuaciones que prevé la Ley Foral 15/2005, del menor, y a esos efectos todos los años en el informe anual hacemos una referencia a los principales aspectos de cumplimiento de los planes que tiene el Gobierno en este punto. Tampoco es novedoso porque, como decimos, está recogido en la ley del menor.*

*Desarrollar investigaciones, estudios, etcétera, y para ello suscribir convenios con entidades públicas y privadas. Tampoco hay ninguna novedad.*

*Valorar la situación de la infancia y de la adolescencia en el informe anual, que es a lo que me acabo de referir.*

*Entre las funciones propuestas, las que suponen una novedad respecto al marco actual, figuran las siguientes y decimos que su fijación depende en última instancia de la decisión que adopte el Parlamento, según su mejor criterio. Nosotros hacemos una propuesta y la justificamos, pero no tenemos una postura predeterminada o, de tenerla, es esa, la que figura en el informe, y también es discutible y lo podemos debatir luego perfectamente. No pretendemos más que reflejarlas, no las reivindicamos como necesarias o imprescindibles, sino que esto es, como decimos, al libre juego que adopte el Parlamento en ese proceso de enmiendas que luego habría si llegara a tramitarse la proposición de ley.*

*Por ejemplo, emitir los informes que en asuntos concernientes a las personas menores de edad le deba solicitar el Gobierno de Navarra cuando ejerza su iniciativa legislativa o reglamentaria. Son informes preceptivos, no vinculantes, y el plazo para emitirlos son veinte días. Parece lógico que una institución que tiene unas funciones de velar por los derechos de los ciudadanos deba pronunciarse sobre las normas que se están tramitando sobre derechos, precisamente, de los menores. Esta función no está hoy en el ordenamiento jurídico. Algún Consejero o funcionario de la Administra-*

*ción puede decir que retrasa el proceso de elaboración de las normas, pero, bueno, como también hace falta el dictamen del Consejo de Navarra, se puede coincidir o en todo caso adelantar, y el plazo es de veinte días que da tiempo suficiente para pronunciarse si se ve una vulneración grave de los derechos. Sería un informe, como digo, que tendría carácter preceptivo, por lo tanto, sería obligado, el Gobierno debería recabarlo, pero no sería vinculante y, por lo tanto, tendría el carácter sugerente y recomendatorio que tiene la institución del Defensor del Pueblo. Es una garantía para los derechos de la infancia y de la adolescencia, pero en todo caso sin perjuicio de la autonomía del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo.*

*Otra función, la de supervisar la actividad de las personas físicas, entidades, empresas, asociaciones, fundaciones o cualesquiera otras personas jurídicas, públicas –ya lo pueden hacer– o privadas –está ahí la novedad–, que presten sus servicios a los menores de edad, de cualquier forma, ya sea en actos o en omisión de los mismos, y si aprecia un delito o una infracción ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal o de la Administración Pública competente. A estos efectos, como está actuando el Defensor con su personal como un agente inspector de la Administración, entre comillas, tendría su función, la propia que tienen todos los agentes de la autoridad; sería una autoridad y sus actos o los hechos constatados tendrían valor probatorio en esa presunción iuris tantum que tienen las actas de los agentes de la autoridad y que, por lo tanto, puede ser destruida mediante prueba en contrario.*

*También puede efectuar recomendaciones, advertencias, sugerencias, recordatorios a las autoridades y la novedad está a las entidades privadas. O sea, ya ven ustedes que es la tercera vez que citamos a las entidades privadas como el ámbito al que se extiende la actuación. La formulación de recomendaciones no es novedoso, pero aquí lo novedoso está en dirigirse a las entidades privadas y esperar a ver qué hacen.*

*Sugerir modificaciones normativas en defensa de los derechos de los menores. Esto ya lo puedo hacer. Efectuar propuestas con dicha finalidad a las iniciativas legislativas en tramitación antes de su dictamen por la comisión parlamentaria correspondiente. Aquí está la novedad y, por lo tanto, es discutible. ¿Puede el Defensor del Pueblo o es oportuno que el Defensor del Pueblo, antes de que la comisión parlamentaria correspondiente emita el dictamen de un proyecto de ley o de una proposición, mande un escrito y haga algún tipo de sugerencia o de recomendación o de propuesta de modificación en materia del menor porque observe algo que pueda vulnerar o que pueda mejorar el régimen de los derechos? Pues nosotros ponemos*

*que sí, pero el Parlamento puede decir: pero, bueno, este Defensor ¿qué quiere, estar en todos los lados, en todos los guisos? Pues se suprime este párrafo. Nosotros lo ponemos, lo decimos y justificamos el porqué. Esto está recogido tanto en el texto madrileño como en la Ley Foral del Defensor del Pueblo, es decir, nos hemos basado en esos textos. De todas formas, siempre le queda al Defensor señalar esas deficiencias legislativas que observe y proponer modificaciones legislativas, incluso a posteriori. Lo que pasa es que puede ser feo que aprobada una ley aparezca el Defensor proponiendo inmediatamente su modificación por entender que una norma aprobada puede ser perjudicial para los ciudadanos, porque se ha incorporado en el trámite parlamentario o donde sea, pero, bueno, ahí está.*

*Otra novedad muy significativa de carácter competencial y también de carácter facultativo es la siguiente, y muy discutible en un debate doctrinal, tal vez en un debate político no interese tanto, pero en un debate doctrinal sí que tiene mucho interés porque esta sería la primera novedad en España acerca de un Defensor del Pueblo y, por lo tanto, aquí hay que andar con cuidado. Lo discutimos y lo proponemos, pero tiene sus riesgos, aviso, de inconstitucionalidad por parte del Estado que entienda que se vulneran sus competencias. ¿A qué me refiero? En la defensa de los derechos de las personas, tanto fundamentales como constitucionales, la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo, las leyes procesales admiten la legitimación de prácticamente todas las asociaciones, del Ministerio Fiscal, de todas las instituciones menos la del Defensor del Pueblo, ni el estatal ni los autonómicos. Nunca nadie ha sabido por qué. O sea, se suele decir porque el Defensor del Pueblo tiene la vía del recurso de amparo y del recurso de inconstitucionalidad, pero en el caso de los defensores autonómicos se ha dudado de que no ponerlo sea porque se estaría regulando, porque el Estado tiene dudas de si no está regulando el campo de actuación de un órgano autonómico, esa es una; o dos, lisa y llanamente alternativa siguiente, porque no quiere reconocerlo. Una de dos: uno, porque regula una cuestión que la tiene que regular la Comunidad Autónoma o el Parlamento autonómico, o, dos, porque no quiere regularla. A nosotros nos ha parecido siempre que ha habido en ese sentido una omisión respecto a la capacidad procesal de los Defensores del Pueblo autonómicos para recurrir actos y disposiciones nulas de pleno derecho que vulneran derechos fundamentales. Mientras que la legitimación, prácticamente, se reconoce con carácter muy amplio en la vía administrativa a todo el mundo menos al Defensor del Pueblo y en la vía contencioso-administrativa también a todo el mundo menos al Defensor del Pueblo autonómico, nos parece que*

*eso es una laguna y hemos propuesto alguna vez su subsanación al Defensor del Pueblo de las Cortes Generales, pero ahí ha quedado el tema, no lo ha planteado, no lo ha llevado más adelante.*

*Nosotros aquí lo planteamos y esto puede ser entendido por parte del Estado como una invasión del Parlamento de Navarra en competencias de legislación procesal. También hemos dicho que esto no está claro, porque el artículo 146 de la Constitución dice que las competencias procesales del Estado son sin perjuicio de las especialidades que se deriven en este orden de las particularidades del derecho sustantivo de las comunidades autónomas, luego hay una capacidad procesal de las comunidades autónomas que se deriven del derecho sustantivo, y nosotros tenemos dudas, digo dudas por no decir certezas porque aquí no se puede poner nunca nada al cien por cien, esto no son matemáticas, digo, pero que tenemos la creencia de que este puede ser un caso de esa especialidad que se deriva de una particularidad del derecho sustantivo de la comunidad autónoma, que es que el Defensor del Menor pueda intervenir frente a actos administrativos o disposiciones administrativas que sean vulneradoras de derechos del menor, o sea, un régimen interior de un centro público o una ordenanza que vulnerara derechos fundamentales y resulta que nadie la impugna, y el Defensor del Menor la observa, pues o da traslado al Ministerio Fiscal que actúa en el ámbito penal o a la vía administrativa a la espera de que requiera o inste la suspensión, etcétera, puede hacerlo o puede ir directamente a la vía procesal y solicitar la nulidad de esos actos administrativos. Es decir, del mismo modo que hay la acción pública en el campo del urbanismo o en materia medioambiental, no creemos que fuera muy atrevido plantear esa capacidad procesal. Estoy dándole muchas vueltas a este punto, pero creo que es la gran novedad que tiene el tema aunque no es un tema tampoco principal, si se suprimiera no pasaría nada. Si se pone tengo que hacer la advertencia leal de que puede haber un recurso de inconstitucionalidad por parte del Estado en ese sentido, pero también quien no se arriesga no cruza la mar y si no se hubiera interpretado la Ley de 1841 con la laxitud y la valentía con que se hizo, pues no estaríamos aquí y pareceríamos más la Diputación de Teruel que lo que hoy somos en ese sentido, pero, bueno, ahí está la cuestión planteada.*

*Otra competencia nueva, porque también la puede hacer, es instar de la Administración la incoación de los procedimientos de responsabilidad patrimonial. Lo puede hacer, hoy se puede hacer, lo que pasa es que lo decimos expresamente para que quede de forma explícita. Cuando se produce un daño a una persona o a una institución o a una entidad privada en su patrimonio por causa de un*

*servicio público, que pueda decirle el Defensor del Pueblo: oiga, acuda a la institución de la responsabilidad patrimonial e indemnícele de los daños habidos y por haber y, por lo tanto, a partir de ahí iniciar la vía del seguimiento y a ver dónde acaba la actuación de la Administración y, si no acaba en ningún lado, instar a la Administración con insistencia, con perseverancia para que lo haga.*

*En cuanto a las acciones o medios para el ejercicio de las funciones encomendadas, aquí decimos que para ejercer hace falta que el Defensor esté habilitado con algunas acciones. Inspeccionar los servicios y dependencias de las Administraciones Públicas y de las entidades privadas. Esto lo podría hacer con la ley. Hoy sería discutible, aunque ya lo hacemos, pero sobre todo en aquellos centros tutelados o centros concertados con la Administración de menores. Entramos en todos, observamos en todos y hacemos una supervisión. Ahí no hay ningún problema.*

*Llevar a cabo entrevistas con el personal de cualquier entidad pública o privada que asista o preste servicios a la infancia o solicitar su comparecencia. Ya se hace con las públicas. Con las privadas tendríamos aquí la cobertura legal.*

*Solicitar informes, reclamar expedientes, lo mismo, sobre las Administraciones y sobre las entidades privadas y se dice que en ningún caso podría alegarse la legislación sobre protección de datos personales o cualquier otra para oponerse a las solicitudes que el Defensor del Pueblo de Navarra formule en el ejercicio de sus funciones. Esto dicho así suena fortísimo. Bueno, pues tranquilidad porque está en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. Dicha ley faculta a los Defensores del Pueblo autonómicos para estar fuera de su ámbito y para que no se les pueda negar nunca ninguna información con alegación a la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. Es una de las pocas instituciones, junto con los jueces y el Ministerio Fiscal, que tiene acceso a todos los datos personales y que tiene el deber del secreto y de la confidencialidad. Nosotros vemos muchísimos datos personales en nuestro trabajo y jamás los revelamos ni los cedemos ni los damos a nadie, son datos para nuestra actividad: el estado psicológico de un menor, el estado psicológico de cualquier persona o el estado físico. Tenemos acceso a muchos de los datos, pero quedan ahí. Por lo tanto, que esto no asuste a nadie sino que es un recordatorio de algo que dice la Ley Orgánica de Protección de Datos, pero hay instituciones y también Administraciones a las que se les olvida y nos lo alegan: no le doy la información porque no me lo permite la Ley Orgánica de Protección de Datos. Hombre, no, que estamos exentos de esa ley, incluso de la Ley General Tributaria, o sea, tenemos acceso a todos*

*los datos, lo hacemos justificadamente, no somos ningunos bárbaros, no nos interesa conocer los datos porque sí, pero cuando los tenemos que conocer porque entra dentro de la función concreta de la queja que estamos viendo no se nos puede levantar ese muro que impida nuestra labor. Por lo tanto, en ese punto no hay más novedad que el extenderlo a las entidades privadas.*

*Celebrar convenios con las distintas Administraciones y entidades públicas o privadas para todo lo que sea necesario en la atención al menor: la psicológica, la sanitaria, la educativa, la social, la jurídica o la de cualquier otro tipo. Nuestra intención no es levantar ninguna Administración paralela ni ningún departamento paralelo del menor, todo lo contrario. Como se verá luego, de lo que se trata es de mantener, prácticamente con el mismo personal o con un poco más, la misma función que hoy hacemos, pero muchas veces hace falta hablar con psiquiatras, hablar con psicólogos, hablar con abogados especializados, con trabajadores sociales en ciertos ámbitos, y es necesario que exista la posibilidad de hacer un mínimo contrato de asistencia con ellos.*

*Instaurar y favorecer un procedimiento de recepción de sugerencias en materia de jóvenes, para que se puedan dirigir hacia la institución.*

*Instar—esta también es nueva, aunque lo pueda hacer, es decir, lo puede hacer, pero se especifica— a las autoridades y a las entidades públicas y privadas la suspensión inmediata de los actos y conductas que puedan ser lesivas de los derechos del menor. Esto se ve fácilmente cuando aparece algo en Internet que vulnera los derechos del menor. Si usted se fija, aparecen inmediatamente el Ministerio Fiscal, la Agencia de Protección de Datos Personales, el Defensor del Pueblo, un conjunto de instituciones pidiendo que se quiten inmediatamente esas imágenes y que no vuelvan a aparecer, que se cancelen. Estoy poniendo un ejemplo, pero esto es algo parecido, es tener esa función.*

*Requerir con carácter preferente y urgente el auxilio de la Policía Foral y de los demás cuerpos de policías de Navarra. Se aclara más adelante que no tenemos ninguna intención de crear una unidad de la policía al servicio del Defensor del Pueblo, pues la nuestra es una función supervisora, sino que se trata de tener la capacidad de, a través del cauce administrativo oportuno, poder dirigirnos a la Policía Foral para que actúe inmediatamente. Cuando se llama a la Policía Foral normalmente es por razones de atención inmediata o de urgencia, pues, bueno, se trata de que podamos dirigirnos a través del cauce normal, el Consejero, el Director General o Jefe de la Policía Foral, y pedir la colaboración para una actuación que sea protectora de los derechos de los menores.*

*Realizar gestiones directas —esto ya lo hacemos en la práctica, pero también lo ponemos para dar cobertura, cuando nos llegan casos inmediatos, y no digo nada en el caso de menores extranjeros— incluso de forma no escrita porque la urgencia del caso lo pide y luego anotarlo en el expediente, dejando constancia expresa a posteriori de las actuaciones realizadas. Si no, no da tiempo, no vamos a estar primero haciendo el papeleo, mandándonos cartas y, mientras tanto, pasa el plazo, y los derechos del menor, sea el que sea, que estén sufriendo.*

*En la séptima, el deber de colaboración nos lleva a plantear si es necesaria o no la tipificación de una nueva infracción en la ley foral del menor, que igual sería el sitio adecuado, para quien obstaculice las investigaciones y actuaciones del Defensor en materia de menores. El procedimiento lo tramitaría el Defensor pero la sanción sería competencia del departamento, porque de lo que se trata es de que no tenga funciones ejecutivas recurribles, que es una de las ideas propias de los Defensores del Pueblo. Instan, pero no deciden finalmente para que no haya recursos contra ellos y se pueda mantener esa idea de que es una autoridad que impulsa, no un poder ejecutivo.*

*Octava cuestión que planteamos. En coherencia con todo lo anterior, lo que decimos es si no sería bueno extender a la instancia general todas estas funciones que le estamos dando al Defensor en materia de menor, de tal manera que no solo sean los derechos del menor los que tengan estas mayores cautelas sino que también las tengan los derechos constitucionales de cualquier ciudadano, los derechos fundamentales sobre todo. Esa es una cuestión que se plantea.*

*Finalmente, se hace una referencia a la posible necesidad de medios personales y materiales. Decimos que hemos hecho una previsión, una estimación, y no creemos que el volumen de trabajo exija una incorporación en la plantilla de más personal que un asesor técnico y un administrativo. Es lo único que hemos evaluado como demanda. Dinero hay en el presupuesto, o sea, no hace falta aumentar el presupuesto. No lleva incremento presupuestario pero sí habría que crear las figuras dentro de la plantilla. Tendríamos un problema de ubicación, porque el sitio es muy pequeñito. No planteamos trasladarnos a ningún palacio ni lugar emblemático, sino, en todo caso, alquilar algún despacho cercano, pequeñito, de estos que se alquilan, para que se ubiquen los técnicos, o el técnico que tenga que ir y el administrativo.*

*Este es el resumen que les he expuesto. Les agradezco la atención y me pongo a su entera disposición, como siempre, para las lagunas y dudas que hayan podido quedar. Gracias. Eskerrik asko.*

SR. PRESIDENTE (Sr. Felones Morrás): Muchas gracias, señor Enériz. Como bien conocen los Presidentes de las Comisiones, suele ocurrir no sé si de forma habitual pero sí de vez en cuando que tengamos problemas con las comparecencias de las autoridades por el tiempo que dedican, sobre todo los Consejeros. No es este el caso, en la medida que las intervenciones del Defensor del Pueblo suelen ser claras, razonablemente breves y correctas al presentar los textos por escrito, y esta Presidencia le agradece la actitud y las facilidades que normalmente da para que el desarrollo de los actos pueda hacerse con comodidad. Por lo tanto, dando constancia de esta cuestión, abrimos un turno para que los grupos tengan la posibilidad de intervenir, si así lo desean. Señor Marcotegui.

SR. MARCOTEGUI ROS: Muchas gracias, señor Presidente. Bienvenido, Defensor del Pueblo, y muchas gracias por la explicación exhaustiva que ha hecho del informe, advirtiéndolo, lo cual es un rasgo de sinceridad por su parte, de las dificultades que están encerradas en orden a materializarlo en una norma legal correspondiente. Esto es algo digno de aplaudir, puesto que nos facilitará nuestra tarea.

Voy a ordenar mi intervención, que va a ser lo más breve posible, siguiendo la sugerencia del Presidente, en tres aspectos, un poco también por seguir su exposición. La primera es el mandato parlamentario, que, lógicamente, estimula y justifica el informe. Creo que ahí hay una piedra angular suficiente como para prestarle la atención debida al mismo. Bien es cierto que empieza con las tres posibles fórmulas de materialización del mismo, que encierran un ligero grado de complejidad que habría que tener en consideración suficientemente y que debería ser estudiado convenientemente. Usted ya se ha decantado por una: una nueva norma al respecto.

Pero este grado de complejidad me hace pasar al segundo aspecto de mi intervención, que son las funciones, y al otro aspecto de las acciones o medios necesarios para el ejercicio. A mí, tras la lectura tranquila y sosegada que he hecho, me ha parecido encontrar algunas complejidades, no digo dificultades, sino complejidades jurídicas que habría que tener muy presentes para no cometer ningún error en la materialización de la intención manifestada en el informe, cual es la de atribuir al Defensor del Pueblo competencias para la defensa del menor. Dificultades que ya digo que le agradezco que no haya excluido, las ha ido planteando y explicando convenientemente, pero que, en fin, me va a permitir que destaque algunas de ellas, no todas, y sin ánimo de contradecirle lo más mínimo ni tan siquiera complementar su información, puesto que yo creo que ha sido dada convenientemente.

La primera es la inmisión novedosa que el informe hace en la esfera privada, bien es cierto que en las personas jurídicas privadas. Ahí se encierra una dificultad o un problema que puede ser la colisión que se puede dar, si no se estudia convenientemente, con los derechos, algunos de ellos fundamentales, que por delegación puedan tener derivadas directamente, por ejemplo, de los tutores o de los padres por la condición de menor precisamente de aquel que es el titular del derecho. Y eso se repite, como bien ha dicho, en varios aspectos. Por lo tanto, esto habría que tenerlo muy presente para andar por un camino sólido.

También se ven afectadas no solamente normas muy vinculadas con la defensa del menor, como pueden ser la ley de dependencia y la del menor o la propia del Defensor del Pueblo, sino otras normas jurídicas más alejadas del mismo, que también están ahí, no digo enfrentadas, pero sí con posibilidades o motivos para plantear dificultades de incardinación jurídica de las mismas con lo pretendido. Por citar algunas de estas normas, en lo que se refiere a la potestad legislativa y reglamentaria, la Ley 14/2004. Así, el valor probatorio de los hechos constatados por el Defensor del Menor, en el caso de que se le atribuyan competencias, puede plantear dificultades en relación con la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y la ley foral semejante. Usted menciona los artículos 137 y 69 respectivamente. También se puede provocar cierta inflación del procedimiento para resolver las cuestiones de las responsabilidades en que se haya podido incurrir en la relación con el menor. Otras serían las dudas razonables de constitucionalidad –a las que usted ha dedicado una explicación extensa– entre lo propuesto y el artículo 149.1.6 de la Constitución Española referido a las competencias exclusivas del Estado sobre interponer, si fuera necesario, ante el orden jurisdiccional competente los recursos que corresponda. Aunque lo ha mencionado y justificado suficientemente, sin embargo, yo creo que tampoco debemos olvidar el roce o la aproximación de lo pretendido con la ley de confidencialidad de los datos personales, aunque usted dice que esta dificultad está perfectamente salvada por la propia ley en un artículo y una disposición adicional.

Finalmente, en aras de la brevedad, comentaré la invasión de otras posibles competencias de otros que órganos también tienen reconocidas en esta materia. Pueden ser, por ejemplo, las funciones del Consejo de Navarra en relación con el informe preceptivo desde el punto de vista del principio de legalidad, no de oportunidad, para comprobar si se vulneran o no las leyes en relación con las normas y reglamentos que desarrolla el Gobierno. Ahí hay, de alguna manera, una cierta invasión o duplicidad de funciones que no sé si retrasarán o dejarán de retrasar, pero si realmente el Consejo de Nava-



*rra tiene reconocida esta función a lo mejor sucede que es suficiente, no lo sé. Y luego está el tema también delicado de la Policía Foral y de los Cuerpos de las Policías de Navarra.*

*En fin, no he sido exhaustivo, usted lo ha sido más que yo, y es digno de advertirnos de estas dificultades.*

*Con todo ello, llegamos al punto tercero, señor Presidente, que es el anexo de la proposición de ley. Yo creo que puede ser oportuno reglamentar las funciones del Defensor del Pueblo como Defensor del Menor, no en vano partimos de un anclaje sólido, que es el acuerdo del Parlamento tomado en una determinada fecha, pero que el grado de complejidad de la norma requiere andar en un terreno que podemos sentirlo quebradizo o delicado, precisamente por todas estas cuestiones que usted y yo hemos planteado. Y eso porque es necesario incardinar esta intencionalidad suya, loable y que desarrolla una intención del Parlamento, en el cuerpo legislativo foral y nacional. Y esto me lleva a la conclusión siguiente: lógicamente, UPN se da por enterado del informe, sin lugar a dudas, apoya la propuesta, como no podía ser de otro modo, pero con un matiz, el de que vaya precedida de un estudio sereno, tranquilo, compartido entre el propio Defensor del Pueblo y los Servicios Jurídicos del Gobierno, para ir resolviendo todo este tipo de dificultades, que pueden darse o quizás no, porque, en todo caso, estamos en el límite, como usted mismo lo ha planteado.*

*Y, en ese sentido, y ahora sí que concluyo, hecho este estudio sosegado, tranquilo y pacífico, será cuando el Parlamento –esa es, al menos, la posición de mi grupo– pueda con seguridad abordar, mediante la iniciativa legislativa que corresponda, sea del Gobierno, sea del propio Parlamento, eso es lo de menos, la materialización de esta ampliación de funciones del Defensor del Pueblo en materia de protección del menor. Tenemos un precedente próximo que alguna dificultad nos ha planteado, que es el de los plazos preclusivos. En ese caso el Parlamento recogió su informe y su intención, y, sin embargo, tuvo que enmendarse a sí mismo porque en la propuesta de resolución que se hizo había algunas dificultades de orden de incardinamiento jurídico entre lo pretendido y alguna norma de rango legal, incluso la propia Constitución. Ese sentir es el planteamiento de nuestro grupo. Consecuentemente, apoyamos la iniciativa, pero solicitaríamos ese paso prudente antes de materializarla.*

**SR. PRESIDENTE (Sr. Felones Morrás):** Muchas gracias, señor Marcotegui. Por Nafarroa Bai tiene la palabra la señora Pérez.

**SRA. PÉREZ IRAZABAL:** Eskerrik asko. En primer lugar, quiero agradecer al Defensor del

*Pueblo la visita y el informe realizado, también a las personas que le acompañan, y darles los buenos días. Nosotros, en primer lugar, reconocemos la necesidad de ese trabajo que se ha realizado, como así aparecía en la resolución número 71 del Parlamento. Nos parece muy importante el hecho de clarificar, ampliar y reforzar las competencias que ya había, porque, a pesar de que haya alguna competencia nueva, por decirlo de alguna manera, la sensación que se tiene tras la primera lectura es la de que esto en realidad es lo que se está haciendo pero concretado y digamos dándole una especie de protección a lo que ya se hace o lo que se quiere hacer. Me parece importante tanto para los menores como para la institución del Defensor del Pueblo poder concretar estas cosas y poder tenerlas escritas y poder apoyarse en algo.*

*Uno de los primeros puntos que aparecen en el informe es de encaje de bolillos, de dónde metemos esto, de cómo hacemos para poder modificar y poder colocar esto en el sitio que se merece. Nos da tres opciones y escoge una. A nuestro grupo le parece la más adecuada, la más fácil. También es cierto que, una vez visto, todo el mundo es listo, entonces, lo ves así, y dices: parece adecuado.*

*Respecto al anexo, y uno el final con el principio, en el que ya nos da una proposición, como al principio ha planteado sus dudas, nuestro grupo quiere agradecerlo, porque me parece que es facilitar la labor parlamentaria. De hecho, solo es un borrador que antes de presentarse se puede o no modificar, con lo cual me parece que es una labor que nos ayuda y mucho. Como esta misma proposición de ley ya se ha presentado tal cual, desde aquí queremos dar nuestro apoyo al tema.*

*Y entrando un poco en los puntos más concretos que plantea, ciertamente, debemos aplaudir el hecho de la supervisión de la inspección dentro de la esfera privada, de las entidades privadas. Si queremos proteger a nuestros menores no nos podemos quedar solamente en lo público, creo que es importante y necesario el paso que se da y, como digo, desde aquí queremos aplaudirlo.*

*Otro punto importante es el tema de la mediación, que aunque ya se hacen cosas en ese sentido y aunque no es nuevo en la práctica, el hecho de que aparezca tal cual es muy importante, es una forma de reconocer que es el modo más adecuado, porque aunque aparece ya en temas anteriores: utilizar los modos más adecuados..., no aparece tan explícitamente y tan concretamente, entonces, queremos agradecer la apuesta que se hace por este camino.*

*Y antes de entrar en el tema quizás más espinoso, el de las nuevas funciones, me gustaría quedarme en un punto, que es el del fomento del conocimiento de los derechos de las personas menores.*

*Nuestro grupo ha defendido una y otra vez la necesidad de hacer campañas de sensibilización y divulgación de los derechos del menor, y me parece que es importante volverlo a repetir hoy aquí, porque es uno de los cometidos que tiene el Defensor pero es uno de los cometidos que tenemos todos. Ya en su momento presentamos una iniciativa sobre la campaña Ciudades Amigas de la Infancia, no me voy a meter ahora con el tema porque ya en su día tuvimos oportunidad de defenderlo y, además, todos coincidimos en que era necesario, y, bueno, tenemos que hacer hincapié en todos los derechos del niño, y de la niña, por supuesto, porque a veces nos quedamos en los más evidentes, en los que parece que son de cajón de madera, pero hay otros que también lo son y se nos pasan, y yo estoy convencida de que no los cumplimos, y son derechos tan importantes como el derecho a la participación. Por eso me parece importante que entre las propias funciones aparezca dar cabida a la mejora de la participación de los propios menores.*

*En las entidades locales a veces se habla de ello, pero realmente no estamos dando cabida a la participación infantil, y eso en las entidades locales, porque si hablamos a nivel de Parlamento y a nivel de Gobierno la participación es escasa. Creo que realmente queremos hacerlo pero no lo hacemos, no les damos el derecho a la opinión que tienen, o les damos un derecho a opinar que luego no tenemos en cuenta, con lo cual no es un verdadero derecho a la opinión. Y, como uno de los derechos de los niños y niñas es el derecho a la reunificación familiar, tenemos cerca la modificación de la ley de extranjería, no a nivel autonómico pero sí estatal, y se están poniendo trabas a la reunificación familiar. Tengamos mucho cuidado con el tema del derecho a la reunificación, pongamos facilidades y no trabas. Y, por supuesto, y no me quiero entretener más, hay otros temas que pueden parecer no tan importantes pero que a mí me parece que son importantes, como son el tema del ocio, del tiempo libre adecuado a los niños, qué se está haciendo, y creo que todavía tenemos muchos pasos que dar. Por supuesto, el tema de la integración, pero creo que ese tema merece un capítulo aparte del que me gustaría hablar en otro momento con el señor Defensor en otras condiciones. ¿Qué podemos hacer con la integración de todos los niños y niñas en nuestro sistema educativo? Sé que se hacen cosas, pero es mucho el camino que nos queda por recorrer.*

*Y yo, al contrario que el señor Marcotegui, que siempre, bueno, no sé si siempre, pero que le gusta suavizar, descafeinar iniciativas y demás, creo también que a pesar de las dudas o dificultades en torno a la constitucionalidad o no de ciertas medidas hay que arriesgarse, y, bueno, como lo de la Diputación de Teruel, lo de Teruel también existe, nosotros también existimos, y pienso que tiempo*

*hay, esto es un borrador, aunque se haya presentado tal cual y, como digo, tiempo hay de presentar enmiendas, tiempo hay de pensar, pero creo que ahora es el momento de decidirse y de ir dando pasos en este sentido. Nos parecen muy importantes las tareas de emitir informes y de intervenir en los dictámenes porque es positivo tener el punto de vista de la infancia. Ya que no lo tenemos digamos directamente por lo menos curémonos en salud y escuchemos lo que el Defensor del Pueblo, el Defensor del Menor en este caso, pueda decir en este sentido, y es muy bonito lo del abogado de menores y abogado privilegiado, que lo tengan quienes más lo necesitan, y si hay un sector que lo necesita es el de los menores.*

*Entonces, repito nuestro agradecimiento por este informe y le animamos a seguir por este camino. Nada más y muchas gracias.*

**SR. PRESIDENTE (Sr. Felones Morrás):** Muchas gracias, señora Pérez. Por el grupo socialista tiene la palabra el señor Monzón.

**SR. MONZÓN ROMÉ:** Gracias, señor Presidente. Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer la presencia del Defensor del Pueblo y del equipo que le acompaña para presentar este informe que, como él nos ha explicado, trae causa del debate del estado de la Comunidad y que trae causa también, como no puede ser de otra manera, de un acuerdo parlamentario, de una propuesta de resolución de este grupo, el grupo socialista, una de cuyas cuestiones es la que hoy el Defensor del Pueblo ha cumplido con suficiencia, por no meterme en terrenos calificativos de notable o notable alto, digamos que con amplitud, generosidad y prontitud, y creo que el último calificativo es el más importante.

*Además, como ya hemos visto en este Parlamento en otras comparecencias, viene en un momento interesante cuando menos, un momento en el que se está hablando mucho del tema de los menores. Ha habido un informe del Defensor del Pueblo de España, hemos tenido aquí sesiones de trabajo y comparecencias de la Fiscal de Menores, de la Consejera recientemente, hablando de la situación en Navarra, previamente usted nos aportó un informe genérico y otro específico de los menores extranjeros no acompañados. Parece que en Navarra cuando menos las cosas están un poco mejor que en otros sitios de España, y eso nos da tranquilidad, pero, como dije en la última comparecencia de la Consejera, eso no nos tiene que dejar satisfechos ni tranquilos, tenemos que profundizar en la protección, en el apoyo, en la atención, en la promoción de los menores, y en esa idea genérica y primigenia es en la que se basó nuestra propuesta de resolución que fue aprobada y de la que usted da hoy cuenta cumplida y satisfactoriamente.*

*Usted ya nos ha dicho que el marco regulador, por así decirlo, en el ámbito foral, por supuesto, es la Ley Foral de Defensor del Pueblo del año 2000, la ley foral de menores del año 2005, y otra que también usted cita y que no podemos olvidar, la Ley de Foral de Servicios Sociales. Nosotros hemos preguntado qué formulaciones hay sobre el tema del Defensor del Menor en otras comunidades autónomas, cómo se ha articulado esta figura en diferentes sitios, y hay de todo tipo y variedad. En algunos sitios, como en la Comunidad Autónoma Vasca, es una figura independiente del Defensor del Pueblo, aunque vacía hasta el día de hoy de contenido y de funcionamiento. Se promulgó, la ley, se creó la institución, pero no ha tenido contenido ni funcionamiento. Por otro lado, tenemos el ejemplo de Cataluña, donde está dentro del Defensor del Pueblo, que allí se llama de otra forma y que como no lo sé decir exactamente no cometeré el error de pronunciarlo mal. Es un adjunto, vamos a decirlo así, del Defensor del Pueblo de Cataluña.*

*También hemos preguntado, desde nuestra ignorancia, porque no somos juristas, algo que se nos ha planteado como debate teórico, que es la posible colisión de intereses que se puede producir cuando el Defensor del Pueblo tenga que defender al padre y el Defensor del Pueblo del Menor al hijo. Bueno, yo creo que en Cataluña lo han resuelto bien y que esa no debe ser, en todo caso, nuestra preocupación, porque el tamaño de nuestra comunidad autónoma no da para crear instituciones. Yo creo que estamos por la eficiencia y por la racionalidad de los recursos públicos, y usted además apunta al final de la intervención que no habría que incrementar el presupuesto de la institución del Defensor del Pueblo, sí proveer más puestos pero no más recursos económicos.*

*Del informe y de la presentación que hoy nos hace la institución que usted representa se ha decantado por elaborar un proyecto o una proposición de nueva ley foral. No sé si sabe, creo que sí, pero, si no, lo digo en sede parlamentaria, que nuestro grupo hizo suyo en el mismo momento el texto, por así decirlo, y lo reconvirtió en una proposición de ley que registró en el Parlamento y que ya ha sido vista por la Mesa y la Junta y que, si estas lo tienen a bien, la toma en consideración se verá en el Pleno del Parlamento. No lo hicimos por nada, es un trabajo de la defensoría, pero entendíamos que estábamos legitimados para hacerlo por cuanto, como he explicado al principio, trae causa de la primigenia causa, que era nuestra propuesta de resolución en el debate del estado de la Comunidad. Si lo hubiera solicitado otro grupo no habríamos hecho tal cuestión porque habría sido ruborizante para nosotros hacer una apropiación de algo que en origen no habíamos solicitado, pero, como sí lo habíamos hecho, entendíamos que desde nuestro grupo debíamos*

*sustentar su idea y proponerla por la vía y por el cauce reglamentario en el Parlamento al Pleno para que este, si así lo estimara, la tomara en consideración. No le hemos cambiado ni una coma ni un punto, porque entendemos que una vez tomada en consideración, si así se estima, y parece ser, por los conocimientos que tenemos, que así va a ser, con una mayoría suficiente cuando menos, luego en el trámite parlamentario del debate en Comisión todo es perfectible, todo es mejorable y todo se puede concretar y ajustar.*

*El eje que usted nos ha planteado es, como decía la portavoz de Na-Bai, concretar en una norma de rango de ley cosas que ya se están haciendo y ampliar otras. Nosotros nos hemos quedado con que la única que puede tener controversia constitucional es la que usted dice en la página 6 de su intervención: interponer, si fuera necesario, ante el orden jurisdiccional —no seguiré, porque ya lo hemos escuchado— y que será objeto, cómo no, de estudio. Cuantas más opiniones cualificadas se puedan conocer en este Parlamento mejor. El Gobierno, como lo hará, me imagino, puede emitir informe preceptivo antes de la toma en consideración de la proposición de ley, también estamos abiertos a que los Servicios Jurídicos del Gobierno puedan aportar en el trámite parlamentario sus criterios al respecto, como no puede ser de otra manera, porque nuestro grupo lo que no busca en ningún momento es una colisión con el Estado, con el Gobierno de España y sus competencias, pero si hubiese margen como para que Navarra las tuviera apostariamos por ello. Es decir, no vamos a la confrontación por la confrontación, sino a la ampliación de competencias si tuviéramos margen y marco para ello.*

*Por otro lado, en cuanto a espacios, nosotros, como grupo, bien sabe, y usted en algún informe también lo ha citado, estamos preocupados por la racionalización de espacios, y cerca de su sede puede quedarse algún espacio libre porque según hemos escuchado en sede parlamentaria las federaciones se van a ir al nuevo Reyno de Navarra Arena y estas utilizan un espacio cerca de su sede que se podrá quedar libre o, si lo utilizan para otra cosa, otro se quedará libre, con lo cual eso no es ningún problema cuando estamos hablando de personas menores por cuyos derechos hay que velar.*

*En cuanto a la intervención del portavoz de UPN, no sé si él conocía que ya está presentada la proposición de ley, porque, si no, no entiendo parte de su argumentación, no encaja el hecho de conocer que está presentada con su argumentación.*

*Las dificultades, señor Marcotegui, las compartimos. Claro que hay dificultades, el Defensor lo ha dicho, la apuesta es que si hay posibilidades avanzamos y si hay confrontación no avanzamos. También estaremos de acuerdo en ello.*

*En cuanto a la invasión de otras competencias con otros órganos como el Consejo de Navarra, yo personalmente, y soy un neófito en la materia jurídica, políticamente no lo termino de ver, porque, como se suele decir en derecho, lo que abunda no daña, y esto sería abundar; no sería dañar, pero, bueno, también se podrá estudiar.*

*Lo que nos preocupa es la preocupación, valga la redundancia, de UPN de que el Defensor pueda entrar en la esfera de instituciones privadas, entiendo que no concertadas, porque en las concertadas ya puede entrar, y yo creo que aquí sí puede haber fuerza de ley, y nosotros apostaríamos por ello, porque, esté concertada o no, si está atendiendo a personas menores, porque no estamos hablando de la familia, estamos hablando de instituciones, si hay fuerza de ley estaríamos por que el Defensor entrase también en esa materia.*

*La Cámara está para hacer un estudio sereno y compartido, pero me parece que gran parte de lo que el Defensor del Pueblo nos propone hoy está transpuesto en la proposición de ley, y creo que en otras defensorías del menor en España, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, el Defensor del Pueblo tiene muy amplias competencias, con lo cual, por sintonía ideológica, creo que UPN las asumirá también para Navarra cuando existen en Madrid. En todo caso, como digo, estaría la única, la puntual de interponer, si fuera necesario. ante el orden jurisdiccional..., y repito que nosotros, si no hubiese confrontación ni colisión, apostaríamos por asumir y darle al Defensor del Pueblo-Defensor del Menor esta función y esta competencia.*

*Termino, señorías, agradeciéndoles al Defensor del Pueblo y a su equipo el interés que se han tomado en esta materia. Es un interés para una población, las personas menores, muy sensible, que necesita toda la protección y apoyo institucional por las dificultades y por los casos que se van conociendo en el ámbito de España. Le agradezco el trabajo, cómo no, y quedo a su entera disposición y a la de su institución como grupo parlamentario para perfeccionar y mejorar la proposición de ley pensando en las personas menores de Navarra. Muchas gracias.*

**SR. PRESIDENTE (Sr. Felones Morrás):** Muchas gracias, señor Monzón. Por la Agrupación de Parlamentarios Forales de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Erro.

**SR. ERRO ARMENDÁRIZ:** Muchas gracias, señor Presidente. Buenos días, egun on. Saludo a los trabajadores del Parlamento, a los de los medios de comunicación, a todos ustedes y especialmente al señor Enériz, al señor Beltrán y al señor Sarasibar. Creo que es necesario felicitar la iniciativa del grupo socialista en el sentido de que ha permitido traer a debate un asunto de una

*especial sensibilidad y una especial atención que creo que, más allá de las noticias de actualidad que pueda haber sobre el tema, precisamente por la gravedad y vulneración de derechos de personas en situación de necesidad, requiere de esta Cámara amparo, apoyo y permanente supervisión de las actuaciones que se realizan, pues hablamos de menores de edad.*

*En ese sentido, diré que Izquierda Unida comparte absolutamente la extensión de la función de la figura del Defensor del Pueblo a esa actividad de defensor de los menores de edad también en las entidades privadas que prestan servicio a la infancia y a la adolescencia. Una vez dicho esto, añadiré que, a nuestro juicio, es una cuestión formal, como ya se ha comentado al principio, pero seríamos más partidarios de la modificación de la propia ley de creación de la figura del Defensor del Pueblo que de la aprobación de una ley específica al respecto, porque nos parece que se puede incardinar perfectamente en la estructura de la oficina del Defensor del Pueblo. Navarra no tiene, por su dimensión social –lo señalaba también el portavoz socialista–, previsión de constituir una figura ajena al Defensor del Pueblo como Defensor del Menor y, por lo tanto, se puede incardinar de forma estructural en las actuaciones, aunque sea un tema sectorial, pero, evidentemente, el apoyo en la supervisión de las actuaciones en materia de los menores de edad es de la suficiente entidad, de la suficiente sensibilidad como para incardinarlo en esa legislación y, por lo tanto, será algo que también podamos debatir una vez tomada en consideración esa proposición de ley, que aunque en principio tiene esa nueva configuración nosotros vamos a traer a debate la posibilidad de incorporarlo en el cuerpo legal de constitución de la figura del Defensor del Pueblo.*

*Como también apuntaba el portavoz socialista, nos parece que las dudas o las chinitas en el camino que UPN pretende poner a esta proposición, y lo digo por la intervención de su portavoz, pueden estar orientadas precisamente porque se amplía el espacio de supervisión y de control de las actuaciones por parte de la defensoría, que va más allá de lo que actualmente tiene, y que se incorpora el ámbito privado, pero me parece que es absolutamente necesario. En Navarra no tenemos en este momento ningún tipo de denuncia y, tal como dijo recientemente el Defensor del Pueblo en este Parlamento, no hay sensación de que pueda haber ninguna mala práctica en esta materia, pero creo que podríamos poner la venda antes de que se produzca una herida de la naturaleza que tienen estas actuaciones. En ese sentido, no compartimos esas dudas, que pueden ser analizadas, pero no como obstáculo, sino precisamente que se deba incardinar, tal y como está establecido en el marco legal de nuestra Comunidad, pero también deberemos*

plantearnos retos como los que se plantean en la proposición de ley. Yo creo que asumir la competencia que se señala en su planteamiento de regulación en relación con la legitimación procesal del Defensor del Pueblo es un debate que debemos asumir porque no hay un planteamiento jurídico previo que señale su inconstitucionalidad. Navarra soportó durante una legislatura que determinadas leyes aprobadas por este Parlamento fueran recurridas por el Gobierno central por motivos ideológicos. Sabemos que muchas veces son más los motivos ideológicos que realmente la vulneración legal lo que incita al Gobierno central a tomar determinadas iniciativas. Nos parece que esa práctica es absolutamente perniciosa, que no está basada en planteamientos jurídicos reales, sino en motivaciones ideológicas, y en aquellos recursos ustedes tenían una gran responsabilidad porque se trataba de leyes que contaban con el rechazo de su grupo parlamentario y muchas veces se instrumentalizaba al Gobierno central para interponer determinados recursos e intentar paralizar la capacidad legislativa de esta Cámara. Por lo tanto, no frivolizemos con determinados elementos, como decía el portavoz de UPN, hagamos estudios serenos, sensatos, objetivos, rigurosos, pero, desde luego, aquella experiencia en absoluto contaba con los calificativos que usted pedía en este ámbito y, por lo tanto, supongo que en esta situación no pecaremos de los mismos elementos, y, desde luego, más allá de los informes jurídicos, creo que el Parlamento de Navarra tendrá capacidad política para determinar las posiciones que considere oportunas y a nosotros nos parece que no solamente en el tema del menor, creemos que este reconocimiento de la legitimación procesal se debería extender al conjunto de las actuaciones del Defensor del Pueblo, y pienso que este es un debate, una reflexión que puede suponer también una modificación general de la ley de creación de la propia defensoría del pueblo, que también este debate puede ser enriquecedor para que durante este ejercicio, porque parece que será este año cuando se debatirá esta cuestión, se pueda plantear la posible modificación de la propia Ley del Defensor del Pueblo para incorporar con criterio general esta legitimación procesal.

No voy a repetir los argumentos favorables de la capacidad de denuncia del Defensor ante el Parlamento y ante otras instancias, pero sí le haría una petición, y es que, por la especificidad del asunto, no solamente se incorpore al informe general del Defensor del Pueblo sino que se haga un informe específico, que haya anualmente un informe general de las actuaciones con respecto al conjunto de los ciudadanos y otro específico sobre su figura como Defensor del Menor en el que se recojan las aportaciones concretas para que podamos tener un debate social y político concreto

sobre qué medidas se están adoptando y cómo es la situación del menor en nuestra Comunidad.

Tengo una duda que me gustaría aclarar, o quizás en el debate legislativo deberíamos aclarar cuál es la capacidad de actuación de su personal asesor. No acabo de entender esa unión de realizar en varias ocasiones por sí mismo o a través de su personal asesor. Creo que sería conveniente una clarificación de cuáles son las funciones del Defensor, de cuáles pueden ser delegadas o cuáles no podrían ser delegadas en ningún caso a ningún personal adjunto.

Y termino. En relación con los medios materiales y humanos, creo que no sería oportuno disgregar las funciones de la defensoría del pueblo en dos sedes, más allá de que no vayamos a un palacio emblemático donde se deban desarrollar con oropeles sus planteamientos, porque creo que precisamente la defensoría del pueblo debe estar cercana a la ciudadanía, y pienso que sería negativo que la estructura de la defensoría del pueblo, que tampoco es muy grande, estuviera en sedes diferentes. Lo que sí le podríamos plantear es que en el informe anual que traerá a finales de este año se puedan estudiar las necesidades presentes y futuras, previsibles de dimensionamiento del espacio físico de la oficina del Defensor del Pueblo de Navarra, porque, evidentemente, el espacio físico también influye o tiene un elemento importante, primero, de recepción de la ciudadanía, que tengan clara cuál es su referencia física, adónde se tiene que dirigir en cada necesidad, pero también en la propia filosofía de las personas que comparten la oficina del Defensor del Pueblo hay una interrelación evidente y, por lo tanto, que se ubiquen en dos espacios diferentes, aunque se pueda diferenciar el técnico y administrativo que se ocupa del tema del menor con el resto de asuntos... Creo que es necesaria una coordinación permanente, una intervención de todo el personal que está asignado a esa oficina y, por lo tanto, quizás habría que estudiar algún planteamiento, si es de cambio de ubicación, pues que sea de cambio de ubicación, pero que en el mismo espacio físico se contemple la prestación y la presencia de todo el personal y de todas las atenciones al conjunto de la ciudadanía. Creo que no tiene mucho sentido, por su dimensión, que tengamos otra oficina que, aunque esté cerca, ya es otra referencia, otro espacio físico. Me parece que eso no tendría mucho sentido porque estamos hablando de dimensiones pequeñas que se podrían ubicar en un espacio concreto.

Por mi parte, nada más. Muchas gracias nuevamente por la rapidez en el trabajo y por la novedad de indicarnos posibles actuaciones en materia legislativa que aunque es competencia de este Parlamento, como evidentemente usted ha señalado, puede ayudarnos a realizar la labor, y así ha

sido, porque ya tenemos a debate esta iniciativa en el propio Parlamento. Muchísimas gracias.

SR. PRESIDENTE (Sr. Felones Morrás): Muchas gracias, señor Erro. Para contestar a las preguntas tiene la palabra el señor Enériz, y en todo caso me gustaría que, en la medida de lo posible, hiciera una respuesta lo más ajustada que a usted le parezca razonable.

SR. DEFENSOR DEL PUEBLO DE NAVARRA (Sr. Enériz Olaechea): Ajustada en tiempo, me imagino. Muchas gracias, señor Presidente, por sus amables palabras de inicio.

Señor Marcotegui, efectivamente, hemos tratado de facilitar la tarea con la advertencia de las dificultades. Hay algunas cuestiones que, en aras de esa rapidez, voy a concretar directamente. Por ejemplo, sobre la inmisión novedosa en la esfera privada, yo creo que se ha dicho por aquí que ya lo hace el Defensor de la Comunidad de Madrid, prácticamente es lo mismo, es repetición, es textual. Lo que dicen el informe y ese anexo y lo que dice la proposición de ley orgánica del Defensor del Menor que ahora está en las Cortes Generales es exactamente lo mismo, y lo mismo hace el Defensor del Menor de Andalucía, es decir, es normal que el Defensor del Menor entre en el sector privado –lo tienen reconocido por ley–, pero hace falta una ley que lo reconozca. Otra cosa es el debate de si tiene que entrar o tiene que dirigirse al Departamento de Asuntos Sociales y que este se pueda meter. Cualquiera de las dos fórmulas es viable, nosotros hemos planteado, dentro de las más amplias o de las más plenas, que era lo que se pedía en la moción, las que ya están reconocidas en la ley de la Comunidad de Madrid, que es del año 96, tiene prácticamente trece años y es una ley desarrollada que no ha planteado ningún problema en ese sentido, y yo creo que la figura del Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid es una figura bastante consolidada e incluso reconocida en sus resoluciones.

Efectivamente, creo que hay dudas razonables de constitucionalidad. No hemos querido plantear ningún roce, no es roce lo de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, eso lo tenemos absolutamente claro, creo que por el paso del tiempo, en todas las Administraciones, empezando con la tributaria, que es de las más significativas, e incluso con el Departamento de Asuntos Sociales. Eso ya se ha ido asumiendo y se ha planteado más por desconocimiento de las Administraciones que por la realidad de la práctica.

Respecto a la invasión de otras competencias con otros órganos del Consejo de Navarra, nosotros hemos incorporado lo que hizo la proposición de ley orgánica. No tenemos ningún interés en estar en el procedimiento de elaboración de las leyes. Lo

que sí decimos es que hemos incorporado esas opciones que se barajan y que pueden ser buenas.

Cuando hablamos de derechos, desde el punto de vista de la institución, solemos distinguir entre lo que es la legalidad subjetiva y lo que es la legalidad objetiva, es decir, una cosa es mirar una norma en su respeto a otra norma y otra cosa es mirar una norma en su respeto a los derechos que están reconocidos en leyes, en tratados, en convenios. Es verdad que son normas, pero las vemos desde el punto de vista del contenido, del derecho, y el análisis, créame, es absolutamente distinto, lo que puede ser legal desde un punto de vista formal o desde un punto de vista legal de objetivo, desde el punto de vista legal del contenido subjetivo la discusión es absolutamente abierta o discutible. Puedo poner un ejemplo, Educación para la ciudadanía. No es lo mismo un debate legal objetivo de los decretos desde el punto de vista de la legalidad objetiva que un examen del contenido de los decretos desde el punto de vista del derecho fundamental a la educación, de los padres, de los hijos, al derecho que se debe prestar de educación por parte de los poderes públicos, etcétera. Los debates son radicalmente distintos. Por lo tanto, ahí está la posibilidad de incorporar esa visión desde el punto de vista subjetivo del derecho. ¿Que no se incorpora? No pasa nada.

En el anexo hemos intentado lisa y llanamente... Ante las dudas que planteábamos a todos los grupos, alguien podría decir: parece que ha venido a marearnos esta mañana; nos da tres opciones, ¿qué opción?, ¿qué contenidos?, ¿qué tal? Bueno, pues hemos planteado las que nos han parecido más coherentes –o más atrevidas, para simplificarlo–, de tal manera que sea un documento de trabajo, nada más, o sea, es muy distinto leerse la proposición de ley que leerse el informe. Yo creo que simplifica más leer la proposición de ley. En esto pasa como con las siete y media y el Barón de Vedia en La Venganza de Don Mendo, que no se sabe lo que es peor, si te quedas corto es malo, pero si te pasas es peor. Pues aquí nos pasa algo parecido.

Yo estoy de acuerdo en el estudio sereno. Creo que todas las leyes, esta o cualquier otra, tienen que tener un estudio sereno, y me presto voluntariamente al estudio que ustedes consideren, no puede ser otra la función, y estoy seguro de que el estudio jurídico puede ser perfectamente hecho por el Gobierno de Navarra o por los servicios de la Cámara. Sí que he hecho hincapié en lo que es la práctica constitucional de que normalmente es el Parlamento el que defiende las instituciones creadas por el propio Parlamento, defiende al Legislativo y a sus órganos del Ejecutivo, cada uno actúa en su función. Pero, bueno, eso son cuestiones que no vienen a cuento.

*Lo que me comentaba de los plazos preclusivos a modo de ejemplo, yo vi la incorporación, creo que la incorporación está ahí, pero lo que planteábamos nosotros era el ajuste a la doctrina del Tribunal Constitucional. Eso, haya legislación básica o no haya legislación básica, se tiene que respetar. Eso lo dice la Constitución y lo dice por encima del legislador. Que se quiera añadir por encima la adecuación a la legislación básica, pues perfecto, pero sin legislación básica la doctrina del Tribunal Constitucional forma parte de la Constitución y está por encima.*

*Entro a contestarle rápidamente a la señora Pérez, de Na-Bai. Le agradezco el reconocimiento al trabajo, le agradezco también las palabras que me ha dedicado. Sobre lo del encaje de bolillos, ya he dicho que son tres opciones y que se escoge una, se escoge la más amplia. Es perfectamente discutible la elección de cualquiera de las tres, eso está abierto, y nosotros hemos planteado la que nos parecía más clara, por mantener clara una ley general con el paso del tiempo y luego que existan leyes sectoriales. No pasa de ser un borrador de trabajo, y creo que como tal lo hemos presentado.*

*Es verdad que la mediación no es nueva en la práctica, pero es bueno reconocerla y, desde luego, hacemos una labor que intenta ser de mediación, como he señalado.*

*Fomento y conocimiento de los derechos. Estoy totalmente de acuerdo en que es muy importante, probablemente ahí haya que hacer un esfuerzo a través de colegios, a través de institutos, para que los chicos conozcan sus derechos, sobre todo frente a cuestiones que se les plantean, por ejemplo, el ciberbullying, o el peligro que plantean los juegos como el tuenti, o no sé cómo se llaman, y los datos que están cediendo. Es que ni siquiera son conscientes de la cesión de datos voluntaria que están haciendo y de las personas que los están viendo. Cualquier ordenador es accesible desde cualquier lugar del mundo.*

*En cuanto a la constitucionalidad, solo añadiré un matiz. Cuando he hablado de la Diputación de Teruel, por favor, que me perdone la Diputación de Teruel y alguien de Teruel que esté aquí, si es que hay alguien, lo he dicho con todo el respeto en el sentido de la diferencia entre lo que es una Diputación Provincial y una Diputación que ha hecho de una ley pequeña, corta, de veintipocos artículos, todo un régimen foral. Creo que eso se entiende fácilmente.*

*Los informes son sectoriales, efectivamente. Y muchas gracias por sus palabras de agradecimiento y de ánimo para seguir.*

*Al señor Monzón también le agradezco sus palabras. Hemos intentado, y más ante un mandato parlamentario y por unanimidad –se me ha olvi-*

*dado reconocer que fue iniciativa suya en concreto–, ser rápidos, o sea, estamos al servicio del Parlamento en esa función y, por lo tanto, tratamos de contestar cuanto antes.*

*Es verdad que en Navarra la situación está mejor que en el plano nacional y es verdad que también hay que estar vigilante.*

*Y añado otro detalle que igual no he comentado. Estamos en contacto permanente con el Servicio de Protección del Menor y también con el Servicio de Inspección, de tal manera que muchas dudas que a ellos se les plantean sobre el respeto de derechos nos las preguntan a nosotros, a ver qué opinión tenemos. Hace pocos días nos plantearon una cuestión tan nimia como que aparecía en un reglamento de régimen interior de un centro privado la posibilidad de encerrar en una sala a los chicos que son irreductibles, que son hiperactivos y rebeldes y que son un saco de hormonas. Nos plantearon eso. Y nosotros propusimos la supresión inmediata de eso, o sea, la respuesta fue pronta, rápida y clara: suprimir eso del reglamento de régimen interior, porque no se sabe a qué lleva eso. El problema no es que a uno lo puedan encerrar en el cuarto oscuro, el problema es que lo encierras en el cuarto oscuro y ya no sabes qué pasa después del cuarto oscuro, y acaba esposado a la cama, como se vieron casos en el famoso informe del Defensor de Menores de España.*

*Es verdad que hay varios modelos. Nosotros hemos planteado el que nos ha parecido más adaptado, el más barato, si se me permite también la expresión franca, con la idea de que se estudie y se perfeccione durante la tramitación, por lo que le he oído, de la proposición de ley. En ese sentido, cualquier duda que tenga cualquiera de ustedes no duden en contar con nosotros para que se la aclaremos.*

*En cuanto a la intervención del señor Erro, le diré prácticamente lo mismo, que es opinable meterlo en la ley general. Dentro de unos meses igual traemos algo parecido a debate. Saben ustedes que se van creando agencias autonómicas de protección de datos, y estamos debatiendo con el Gobierno, porque le afecta más al Gobierno en un plano directo, la posibilidad de que determinadas funciones que tienen atribuidas las agencias autonómicas de protección de datos las asuman los Defensores del Pueblo, o el Defensor del Pueblo de Navarra en este caso, sobre todo todas aquellas que no son ejecutivas, y que son muy poquitas. O sea, para tres Administraciones que han sido denunciadas en Navarra una agencia de protección de datos no parece que esté justificada desde el punto de vista de la eficiencia, sin embargo, crear una pequeña infraestructura que ni siquiera exige más personal para enseñar e informar a las Administraciones Públicas de Navarra lo que*

*dice la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, cuyo conocimiento hemos llegado todos a la conclusión de que es bajísimo, pues igual sí que está justificado. No sé si se me ve la idea, es decir, se trata de dotar al Defensor del Pueblo de funciones que tiene la agencia, no de duplicar la estructura, pero en ese caso sí que estamos trabajando de la mano del Gobierno porque el Gobierno tiene la Dirección General de Modernización que hace funciones y porque está en el Ejecutivo, etcétera. Incluso estamos hablando con la Agencia Española de Protección de Datos. Otra cuestión es cuando esto viene de un mandato parlamentario, si esa función viene de un mandato parlamentario el plano es otro, es decir, nosotros tenemos que jugar en el campo en el que sus señorías nos marcan.*

*En cuanto a las dudas sobre el ámbito privado, les trataría de disipar que estamos siempre en colaboración con el Departamento de Asuntos Sociales, que nosotros tenemos muy poca estructura y que no somos la Administración paralela, como puede existir en otros modelos. El Defensor del Menor andaluz tiene una estructura muy grande en materia de menores porque la Junta de Andalucía tiene una estructura menor y prácticamente sustituye, y aquí es al revés. Yo hablé con la Consejera, le pregunté qué opinión le merecía la ley, y lo que me comentó es que estaba totalmente de acuerdo porque es un arma más de reforzamiento sobre todo cuando salen los escándalos nacionales, como hace poco. Si sale la Consejera todo el mundo dice: ¿qué va a decir la Consejera?, pues que todo está bien. Es distinto si nosotros hemos hecho esas inspecciones con el mismo método y con la misma crítica que ha hecho el Defensor del Pueblo, de la que ya teníamos conocimiento, y sabíamos qué centros había visto y qué centros no había visto en Navarra, y sabíamos que no había visto el centro de medidas judiciales de Navarra, que es uno de los fundamentales y en donde más vulneraciones se pueden producir, mientras que nosotros sí que lo habíamos visitado y habíamos visto que allí no hay prácticamente nada reseñable. Igual esta noche pasa alguna cuestión, pero el futuro es una cosa y otra cosa es la inspección de las instalaciones.*

*Y lo de la capacidad procesal lo hemos puesto también porque en la aplicación que se vaya a llevar a cabo, aunque creemos que van a ser pocos los casos, tanto en el menor como fuera del menor,*

*o sea, impugnar un acto administrativo por ser nulo de pleno derecho o una disposición administrativa se va a dar en muy pocos casos, y además en esos pocos casos que se dé sería con prudencia, yo creo que el mero hecho de iniciar la vía probablemente llevaría a la modificación de lo que es el objeto de la discusión.*

*En cuanto a la petición del informe especial sobre menores, estoy de acuerdo, se puede hacer, se puede aclarar en una enmienda o se puede hacer sin enmienda, o sea, aquí las cosas se pueden hacer por la vía de hecho, por la vía de derecho, porque no hay ningún problema.*

*Usted preguntaba cuál es la capacidad del personal asesor en esa medida. Es de función de inspección, visitar los centros. El otro día enviamos personal a un centro. El señor Sarasibar estuvo en los MENA de inspección. ¿Qué pasa si se produce cualquier incidente, si no le dejan entrar, si hay un altercado incluso con violencia física?, ¿cuál es el papel que tiene? Lo que reconoce la ley es el papel de autoridad a efectos de tener la máxima protección.*

*En cuanto a las sedes diferentes, la sede actual está muy consolidada, la conoce mucha gente, está muy bien situada, tiene mucha cercanía, pero es pequeña para hacer una ampliación, para lo que estamos hoy basta y sobra, y lo que planteaba no era llevar la sede del Defensor del Menor o el personal del menor a otra unidad, sino llevarlo, si hay algún personal, a una oficina cercana, porque todos hacen todo, o sea, aquí no hay áreas, aquí todos se dedican a todo y lo importante es que esté cercano y que les podamos llamar en un momento determinado y que vayan, también estamos en dos plantas y bajamos y subimos, lo importante es la cercanía. No obstante, como comprenderá, el primer interesado en la unidad de esto, lógicamente, es el propio titular. La idea es evitar gasto, tratamos de que el gasto esté muy contenido, por propio concepto.*

*Nada más. Agradecemos a todos sus palabras y nos ponemos, como estamos siempre, a su servicio. Muchas gracias.*

**SR. PRESIDENTE (Sr. Felones Morrás):** Terminado, por lo tanto, este único punto del orden del día, levantamos la sesión. Muchas gracias.

(SE LEVANTA LA SESIÓN A LAS 12 HORAS Y 43 MINUTOS.)